



2018 finalizó sin un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Aportaciones, que beneficia a Bizkaia y penaliza a Gipuzkoa y Araba. El diputado general alavés, Ramiro González,

reconoció el 28 de diciembre que existen «enormes dificultades» en la elaboración del borrador. El Gobierno de Lakua achaca el retraso a la negociación presupuestaria.

Un año más sin acuerdo sobre la reforma de la Ley de Aportaciones

Ion SALGADO | GASTEIZ

El pasado mes de febrero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, anunció que el borrador de la nueva Ley de Aportaciones llegaría al Parlamento de Gasteiz antes de finalizar 2018. La Nochevieja pasó hace casi una semana, el calendario marca 6 de enero, y no se sabe nada de la reforma de esta norma que regula el reparto de los ingresos entre las instituciones de la CAV.

Las tres diputaciones y el Gobierno de Lakua, instituciones controladas por PNV y PSE, no han sido capaces de definir una propuesta consensuada para reformar la ley, prorrogada desde

2012. El diputado general de Araba, Ramiro González, admitió el pasado 28 de diciembre que sus representantes han rechazado algunos de los documentos presentados hasta la fecha porque consideraron que perjudicaban a este herrialde.

«Lo que se ha puesto hasta ahora sobre la mesa, a Álava no le parece suficiente», señaló, para añadir que, a día de hoy, existen «enormes dificultades». «Llevamos mucho tiempo trabajando en esta materia y Álava va a seguir haciéndolo para que llegue esa propuesta consensuada cuando antes», comentó antes de matizar que su Gobierno no aceptará una ley que «no haga frente, de manera equilibrada, a la situación real del país, es decir a lo que cada territorio de-

LARGA PRÓRROGA

La Ley de Aportaciones se prorrogó en 2012, hace ya siete años. Las instituciones esperaban llegar a un acuerdo en 2016 y no fue posible; entonces se habló de 2018; ha llegado 2019 y todavía no hay un pacto cerrado.

be aportar en función de su realidad económica».

La Ley de Aportaciones esta siendo empleada por el PP alavés como ariete contra el Ejecutivo de González. El mismo 28 de diciembre, la portavoz de la formación derechista en las Juntas Generales de Araba, Ana Morales, acusó al diputado general de «justificar una nueva humillación» a los alaveses.

Morales dijo que la falta de un acuerdo sobre la reforma de la polémica norma supone «un enorme prejuicio para Álava, ya que durante todos estos años hemos estado perdiendo y pagando de más». «Esta ley se está aplicando en el peor escenario posible para los intereses alaveses», añadió la juntera, que parece no recordar que la ley se

prorrogó hace más de seis años, cuando la Diputación alavesa estaba dirigida por su compañero de filas Javier de Andrés.

Los números de la ley

La Ley de Aportaciones es un tema recurrente en las reuniones del Consejo de Finanzas Públicas, ya que, tal como explicó el catedrático de Hacienda Pública de la UPV-EHU Ignacio Zubiri en una entrevista concedida a la Cadena SER en 2016, la norma beneficia a Bizkaia y penaliza a Araba y Gipuzkoa, que reciben una compensación a través del Fondo de Ajuste.

«Si calculamos entre lo que están aportando con los coeficientes recogidos en la Ley y lo que aportarían si realmente pagasen en función de la recaudación, el resultado es que, aproximadamente, Álava está pagando un 5% de más, unos 75 millones de euros más al año; Gipuzkoa está pagando un 3,5% de más, que son unos 100 millones más al año; y Bizkaia acaba pagando un 3,7% menos, que son uno 170 millones de euros», apuntó.

Para corregir esta situación, el Ejecutivo autonómico, las diputaciones y los ayuntamientos, representados a través de Eudel, crearon un grupo de trabajo en el que se está analizando la ley «punto por punto».

Fuentes de Lakua consultadas por GARA aseguraron que el Gobierno tiene previsto presentar una propuesta al resto de instituciones para poder trabajar «a nivel político», pero rechazaron hablar de una fecha concreta. «El consejero prefirió tardar más y hacer una ley con la que todos estemos cómodos», señalaron, apelando a que la negociación presupuestaria ha retrasado la tramitación. También matizaron la reflexión de González: «La palabra no es discrepancia. Hay que entender que afecta al dinero de las instituciones y hay que trabajar más».



Imagen de la última reunión del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, celebrado el pasado mes de octubre.

Endika PORTILLO | FOKU